

Cuadro 1

CARACTERÍSTICAS DE TERREMOTOS RECIENTES

Lugar	Año	Magnitud	Número de muertos	Daños (millones de dólares de 1999) ⁹
Chile	1960	9.5
Alaska	1964	9.2	130	...
Managua	1972	6.2	6,000	3,018
Tangshan, China	1976	8.0	255,000	...
Guatemala	1976	7.5	23,000	2,154
Ciudad de México	1985	8.1	8,000	6,197
San Salvador	1986	5.5	1,200	1,346
Ecuador	1987	6.8	1,000	1,438
Limón, Costa Rica	1991	7.5	55	~1,000
Kobe, Japón	1995	6.7
Armenia, Colombia	1999	5.8	1,185	1,540
San Salvador	2001	7.6	726	...

El cuadro 1 —que utiliza cifras de daños estimadas por la CEPAL para los casos de la región latinoamericana—¹⁰ revela algunos aspectos de interés. En primer lugar que el terremoto de enero, a pesar de su magnitud relativamente alta dentro de los casos analizados, causó un número limitado de vidas. Compárense las cifras de muertes entre las de este evento con la de los eventos de Guatemala y Managua —23,000 y 6,000, respectivamente— y puede concluirse que resultó providencial el hecho de que el terremoto de enero en El Salvador afortunadamente ocurrió durante el día, cuando la población estaba alerta y pudo ponerse a salvo, en tanto que los otros dos eventos fueron en horas de la noche. En segundo lugar, cabe señalar que el monto de los daños —para aquellos eventos sobre los que se cuenta con información consistente— depende en mucho del grado de desarrollo del país afectado; esto es, a mayor desarrollo corresponde un mayor daño, debido a la mayor disponibilidad de bienes.

Es indispensable señalar que el terremoto de esta ocasión en El Salvador se enmarca también dentro de una serie de desastres ocasionados por fenómenos de diverso origen y características que han afectado a la región centroamericana en años recientes. Tanto el número de víctimas fatales y personas damnificadas, como el monto de los daños y pérdidas de este evento, vienen a sumarse a aquellas que se han determinado para los otros desastres de la región,

⁹ Estimaciones de la CEPAL.

¹⁰ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, *América Latina y el Caribe: El impacto de los desastres naturales en el desarrollo, 1972-1999*, México, 1999.

lo que subraya la vulnerabilidad de la misma ante los eventos naturales extremos.¹¹ Al respecto, cabe citar el hecho que en el período comprendido entre 1970 y 1999, los daños ocasionados por desastres naturales en la región ascienden a 22,450 millones de dólares (de 1999), o su equivalente de 748 millones de dólares por año, lo que representa un 1.8% del producto interno bruto regional. Durante el mismo período, los desastres naturales han originado la muerte o desaparición de 55,734 personas, 110,076 heridos y heridas, y 3.2 millones de población directamente afectada.¹²

4. La población afectada

La amplitud del terremoto rebasó en mucho la extensión de este pequeño país, pues llegó a tener efectos no sólo en Guatemala sino que incluso fue perceptible en el altiplano mexicano, a cerca de 2,000 kilómetros de distancia. Siendo así, todo El Salvador sufrió fuertemente el efecto del siniestro cuyos daños, sin embargo, se resintieron con mucha mayor intensidad en los departamentos de la costa, aunque frecuentemente dentro de ellos en municipios y comunidades más al interior.

Para comprender más claramente las razones por las que hubo un número muy alto de población afectada, es preciso reconocer que la mayor densidad poblacional —tanto en El Salvador como en el resto de la región centroamericana— está ubicada en la vecindad de volcanes activos o durmientes, así como de las zonas donde el contacto entre placas tectónicas produce sismos con frecuencia. El siguiente mapa permite ilustrar claramente lo anterior.

¹¹ En un documento reciente el BID y la CEPAL han señalado la correlación que existe entre la vulnerabilidad y el desarrollo: *Una cuestión de desarrollo: Cómo reducir la vulnerabilidad frente a los desastres naturales* (LC/MEX/L.428), 7 de marzo de 2000.

¹² Jovel, Roberto, *El impacto económico y social de los desastres naturales en la región centroamericana*, Congreso La Medicina y los Desastres, Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador, San Salvador, 2000. Véase también, *La transformación y modernización de Centroamérica en el siglo XXI, Anexo: El desarrollo centroamericano reciente*, Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, San Salvador, 2001.

Por esa razón, y como se señaló en el capítulo precedente, los daños y pérdidas ocasionados por los desastres naturales en la región centroamericana —y en El Salvador también— han sido muy elevados, lo que llevó a las más altas autoridades de los países a tomar la decisión de actuar proactivamente en relación con esta temática: reducir las vulnerabilidades y el impacto de los desastres, y fortalecer las actividades y entidades encargadas de atender las emergencias. Así, los Presidentes Centroamericanos —en su XX Cumbre celebrada en Ciudad de Guatemala el 18 y 19 de octubre de 1999— adoptaron un marco estratégico para precisamente reducir las vulnerabilidades físicas, sociales, económicas y ambientales así como el impacto de los desastres.¹⁵ Sin embargo, el terremoto de enero de 2001 se produjo cuando apenas comenzaba la ejecución del Quinquenio Centroamericano de reducción de vulnerabilidades e impacto de los desastres que los mandatarios aprobaron.

Además, la mayoría de las viviendas y otras edificaciones —con excepción de las correspondientes a las zonas donde el sismo fue de mayor intensidad o donde ocurrieron deslizamientos— son de construcción de larga data, que empleaban materiales sin la debida estructura (adobe). Por todo lo anterior, el daño ha sido muy extenso a lo largo de todo el país, con énfasis en las zonas urbanas y rurales ubicadas en la cercanía de la Cordillera Costera, lo cual ha impactado negativamente en las condiciones de vida de la población salvadoreña.

En términos de la proporción de la población damnificada dentro de la total, los departamentos más castigados fueron los departamentos de Usulután, (97%), La Paz (77%) y San Vicente (56%). En el otro extremo, departamentos del norte, que fueron los más afectados por el Mitch, como Chalatenango, Morazán, Santa Ana y el más poblado de todos —San Salvador—, apenas tuvieron una proporción marginal de su población directamente afectada, aun cuando se lamentaran en este último daños en su infraestructura física. (Véase el cuadro de la página siguiente.)

Más aún, en el interior de cada departamento pudieron observarse a menudo fuertes contrastes entre localidades prácticamente arrasadas y otras, vecinas, con daños relativamente menores. Fueron mayormente castigados los municipios de Nueva San Salvador y Comasagua, en el departamento de La Libertad, de Santa Ana, en el departamento del mismo nombre, y de Armenia, en Sonsonate. Efectos mucho más generalizados se sufrieron en Usulután, donde Santa Elena, Santiago de María, Jiquilisco, Berlín, Usulután y San Agustín mostraron impresionantes grados de destrucción en sus construcciones, en su mayoría de una sola planta.

Esta situación de gran proporción de la destrucción total o parcial de la vivienda y otros edificios contrasta con un número comparativamente menor de pérdidas humanas que debieron lamentarse. Desgraciadamente, ascendió a 827 el número de muertes y a 4,520 el de heridas y heridos;¹⁶ sin embargo, es importante tener presente que 485 de las muertes, o sea, casi el 60% del total, provino por sí solo de Las Colinas, en Santa Tecla, (municipio de Nueva San Salvador, departamento de La Libertad), localidad que prácticamente está conurbada con la ciudad de San Salvador. El deslizamiento de la ladera del cerro sepultó con lodo las viviendas establecidas en su falda sin dejar casi supervivientes. Más allá de este trágico acontecimiento que pasó a ser la

¹⁵ Véase la *Declaración de Guatemala*, 19 de octubre de 1999.

¹⁶ Según datos al 2 de febrero de 2001 proporcionados por el Comité de Emergencia Nacional (COEN). Por la premura misma de la emergencia no fue posible disponer de registros por sexo y edad.

imagen más representativa del desastre nacional, pudieron simultáneamente observarse comunidades rurales con destrucción casi total en sus edificaciones y al mismo tiempo con escaso número de víctimas mortales. En parte, la hora en que ocurrió el sismo, la facilidad de salir al descubierto en casas de un solo nivel y los materiales locales de construcción —entre ellos el bahareque y el adobe, que son relativamente blandos— explican que, afortunadamente, no hubiera ascendido a un número mucho mayor las pérdidas humanas.

Departamento	Población total a/	Población afectada b/	Porcentaje de la población total	Muertos	Heridos
Total	6,340,486	1,160,316	18.3	827	4,520
Ahuachapán	322,795	67,784	21.0	-	80
Cabañas	158,823	1,098	0.7	-	7
Chalatenango	203,803	492	0.2	-	4
Cuscatlán	208,825	37,740	18.1	20	43
La Libertad	675,075	143,215	21.2	585	1,364
La Paz	297,726	227,034	76.3	32	153
La Unión	297,765	12,523	4.2	1	8
Morazán	180,493	180	0.1	-	3
San Miguel	486,784	62,478	12.8	19	43
San Salvador	1,981,308	40,189	2.0	24	386
San Vicente	165,230	92,395	55.9	29	53
Santa Ana	558,761	38,432	6.9	47	295
Sonsonate	451,140	96,402	21.4	44	1,295
Usulután	351,956	340,354	96.7	26	786

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Comité de Emergencia Nacional.

a/ Población estimada a enero de 2001, sobre la base de proyecciones del CELADE.

b/ Población considerada damnificada por el COEN, con pérdida o no de vivienda.

Como contrapartida, en buen número de casos las deficiencias técnicas de esas construcciones explican su escasa resistencia a las ondas sísmicas, su colapso y el enorme número de familias que quedaron sin hogar. En efecto, llama la atención la elevadísima proporción de población damnificada directa en los municipios antes mencionados y en departamentos enteros, como el de Usulután, que, tanto a nivel local como nacional, plantea situaciones verdaderamente críticas. Otro de los factores que obstaculizó las labores de salvamento y en general del manejo de la emergencia y que agravó la situación de muchas

localidades severamente castigadas fue su aislamiento por los derrumbes que cortaron los caminos.

Una elevada proporción de la población salvadoreña —el 18.3%— quedó afectada directamente por el terremoto. Según estimaciones parciales, alrededor de la mitad de ésta perdió su casa, y el resto vio afectadas temporal o permanentemente sus fuentes de ingreso, al colapsarse en muchas comunidades la vida económica, al perderse escuelas y centros religiosos, al quedar aislados y con los servicios básicos suspendidos y en general al tenerse que volcar a las labores de emergencia en situaciones muy frecuentemente dramáticas.¹⁷ La afectación de la vida cotidiana evidentemente cobró distintos matices y características en el ámbito urbano y rural (mucho más castigado este último), entre hombres y mujeres, entre la población indígena, e incluso, a título de ejemplo, se señalaron casos de pérdida de archivos del registro civil y judiciales que necesariamente perjudican a los afectados. En general, puede afirmarse que todo el país sufrió los efectos del terremoto, aunque fuera sólo la ansiedad y el estrés que generó, que sin duda se extendió a la cuantiosa diáspora salvadoreña en el exterior, sobre todo residente en los Estados Unidos, que no tardó en ejercer su solidaridad.

Como se verá en detalle más adelante, 130,000 viviendas sufrieron daños de consideración, de las cuales casi 93,000 quedaron totalmente destruidas (de éstas, cerca de 700 soterradas por el efecto de los deslizamientos). Además de las labores inmediatas de salvamento, esta dramática situación habitacional demandó atención extraordinaria por su amplitud y gravedad, lo cual rebasó las posibilidades del gobierno y la sociedad civil salvadoreña. De esta manera, a las pocas horas del desastre, el Presidente de la República declaró estado de emergencia e hizo un llamamiento a la cooperación internacional. Gracias a las medidas adoptadas en consecuencia y a la llegada de equipo del exterior, que se sumó a las disponibilidades internas, pudieron instalarse albergues, refugios y dormitorios para acoger a la población que quedó sin hogar. A principios de febrero, éstos ascendían en número a 142, y daban cobijo a sólo una población de casi 33,000. Esta población pudo haber llegado a 60,000 en su punto más alto, lo que, sin embargo, significa apenas alrededor del 10% de la población afectada primaria, que se estima que perdió su vivienda.

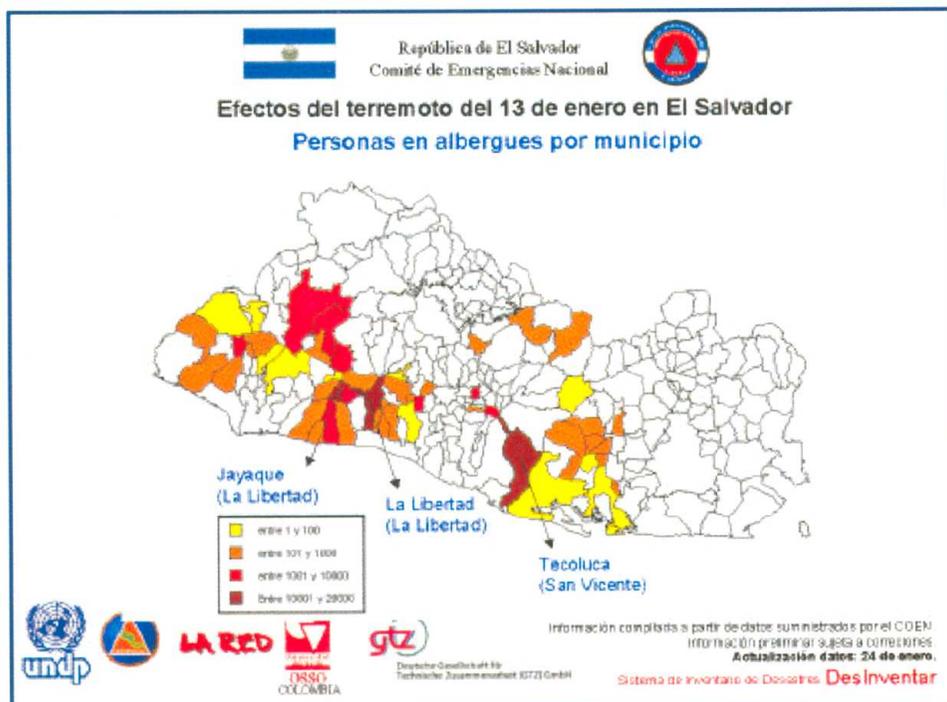
A diferencia de dos años atrás, luego del paso del Mitch, las escuelas y las iglesias no pudieron aprovecharse tanto para estos propósitos, sino que por seguridad y por tratarse de la temporada seca se establecieron preferentemente en espacios abiertos, como parques públicos y campos deportivos. Según datos parciales, pues no se realizaron los debidos censos en todos ellos, el 56% de los albergados eran menores, el 24% mujeres y el 20% restante, hombres.

Contar con este dato es necesario para una mejor orientación de la ayuda, ya que existen necesidades específicas diferenciadas por género y grupo de edad que corren el riesgo de no ser cubiertas si no conocemos la composición de la población damnificada. Es también conocido el mayor riesgo de violencia sexual al que se enfrentan adolescentes y mujeres en condiciones de hacinamiento como las que pueden darse en los albergues y alojamientos provisionales.

¹⁷ La serie histórica del recuento de damnificados mostró en efecto una discontinuidad el 22 de enero al prácticamente duplicarse su nivel del orden de los 500,000 a más de un millón, debido a grandes retrasos en la entrega de la información de las fuentes.

Por otra parte las tareas extraordinarias realizadas por la población en las etapas de emergencia, rehabilitación y reconstrucción coinciden con aquellas socialmente asignadas por género, destinando las mujeres tiempo a la realización de acciones reproductivas para la familia y la comunidad (colas para la recepción de alimentos, provisión de agua y leña, preparación de alimentos y limpieza de ropa y espacios físicos, cuidado de personas enfermas o afectadas emocionalmente, cuidado de niños y niñas y personas ancianas o discapacitadas, actividades de organización comunitaria, etc.) que, al no ser remuneradas, les generan una pérdida de ingresos provenientes de actividades productivas realizadas antes del desastre. Las tareas vinculadas a la producción, generalmente remuneradas, suelen ser asignadas a los hombres (remoción de escombros, reconstrucción de vivienda, reparación de caminos y otros tipos de empleo comunitario).

Estos datos adquieren una mayor relevancia si consideramos que la jefatura femenina abarca el 28.2% del total de los hogares del país. Si no se tienen en cuenta estos factores, se corre el riesgo de que las situaciones de emergencia, rehabilitación y reconstrucción aumenten la inequidad entre géneros. De estos albergues, refugios y dormitorios, 46 (la tercera parte del total) se ubicaban en el departamento de La Libertad, vecino a la capital, dando cobijo a casi el 60% del total nacional: tan sólo los tres instalados en el municipio de Nueva San Salvador llegaron a albergar a más de 10,000 refugiados. El albergue de El Cafetalón es el mayor. En el vecino departamento de San Salvador se instalaron 20 albergues y, en cambio, en Usulután los 21 campamentos disponibles resultaban insuficientes a todas luces para hacer frente a las ingentes necesidades de la población de este departamento. El mapa siguiente detalla la distribución de refugios por municipio al día 24 de enero. Además, la población damnificada se refugió en casa de familiares y amistades; una práctica bastante generalizada fue instalar una tienda de campaña o, en su defecto, sencillamente plásticos, en el patio de la casa, al tratarse en su mayoría de comunidades rurales y coincidir con la estación seca. Ello genera un problema de corto plazo dado que las lluvias empiezan a fines del mes de abril cada año.



Dentro de la descentralización administrativa que se ha desarrollado en este país, las alcaldías han llevado a cabo las labores de distribución entre la población damnificada de víveres, agua potable, ropa, equipo básico para los campamentos y materiales para la reconstrucción mediante de los centros de acopio. Sin embargo, también fue en torno a los albergues donde se centró la ayuda humanitaria del gobierno, con el respaldo de las organizaciones internacionales, y de las ONG, además de la ayuda solidaria de la población local, respondiendo en buena medida a las necesidades específicas y de género durante la emergencia.

5. Acciones para atender la emergencia

Debido en parte a la experiencia y grado de organización adquiridos a raíz del paso del huracán Mitch poco más dos años atrás y de las medidas de prevención y mitigación de desastres que se pusieron en práctica en El Salvador, los actores sociales reaccionaron conjuntamente con relativa agilidad para hacer frente a los efectos del terremoto. Además de las acciones gubernamentales de urgencia que debieron desplegarse con toda oportunidad, respaldadas frecuentemente por la cooperación internacional, destacaron las de las organizaciones de la sociedad civil, en particular de la Cruz Roja Salvadoreña, a la que el gobierno confirió una responsabilidad especial en las labores de salvamento y manejo de la emergencia. Asimismo, el sector privado desempeñó un papel destacado como garante de la distribución de la ayuda tanto nacional como internacional. Este país ha merecido tradicionalmente flujos importantes de cooperación externa, que en esta situación de excepción no tardaron en llegar, provenientes tanto de fuentes gubernamentales bilaterales y multilaterales como de la sociedad civil y de los particulares. Todas estas acciones se complementaron con un destacado grado de organización de las comunidades sobre todo rurales, que aportaron trabajo colectivo —realizado por hombres y mujeres— en la mayoría de los casos sin percibir remuneración alguna.

a) Las acciones gubernamentales

En El Salvador el Comité de Emergencia Nacional (COEN), que depende del Ministerio del Interior, es la entidad gubernamental encargada de las acciones de prevención, mitigación y atención de la emergencia. Tras haber decretado el Presidente de la República estado nacional de emergencia, a las pocas horas del desastre, y de apelar a la ayuda internacional, se emprendieron las primeras acciones de rescate y salvamento, bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas, que al poco tiempo tuvieron el respaldo de equipos especiales para estos propósitos que envió un gran número de gobiernos del exterior.

Así, se iniciaron urgentemente obras de reapertura de caminos interrumpidos por los deslaves, cuyo número rebasó los 500, redoblándose los esfuerzos para vencer el aislamiento de un gran número de comunidades, a la par que se intensificaron las labores de rescate de víctimas. Con las tiendas de campaña disponibles y las recibidas oportunamente de la cooperación internacional, se fueron habilitando aproximadamente 130 albergues, la mayoría en espacios abiertos, dado el alto número de escuelas e iglesias que en otras circunstancias podrían haber servido para este propósito pero que, por los daños sufridos, no pudieron ofrecer un mínimo de seguridad.

Paralelamente a estas acciones, el sector empresarial tuvo una participación importante en la Comisión Nacional de Solidaridad (CONASOL), creada básicamente para asegurar la transparencia en la distribución ágil y eficiente de la ayuda externa e interna, tanto en dinero como en especie. Esta Comisión opera estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Simultáneamente, se abrieron cuentas bancarias para la recepción de donativos dentro del marco de operaciones del también creado Comité Financiero de Solidaridad (CONFISOL).

Como se verá, fue destacada la movilización de los distintos ministerios, en particular aquellos relativos a la salud y saneamiento y a la reapertura de caminos. Asimismo son de destacar las mayores demandas de módulos de vivienda temporal que recayeron sobre el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local (FISDL).

Al mismo tiempo, el Presidente de la República nombró al Ministro de Economía coordinador de las labores de reconstrucción, y el 17 de enero solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar préstamos por valor de 170 millones de dólares para atender las necesidades derivadas de la emergencia. Es importante mencionar que el terremoto de El Salvador fue causa de suspensión y aplazamiento, hasta el mes de marzo, de la reunión del Comité Consultivo Regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Centroamérica, reunión al más alto nivel, que estaba por realizarse el 18 y 19 de enero, en Madrid, España, y que había entrañado grandes esfuerzos de preparación por parte de todos los gobiernos centroamericanos. Luego de haber puesto en marcha proyectos de reconstrucción a raíz del Mitch, el propósito de esta reunión ahora pospuesta será obtener financiamiento para el relanzamiento económico de la región, sobre criterios de más largo plazo. Será precedida, también en Madrid, por otra donde se tratará específicamente la reconstrucción salvadoreña por efectos del terremoto.

b) La Cruz Roja Salvadoreña y otras organizaciones de la sociedad civil

En estrecha coordinación con el COEN y los distintos ministerios salvadoreños del área social, la Cruz Roja Salvadoreña desplegó importantes actividades de búsqueda y salvamento de víctimas, primeros auxilios, evacuaciones y sobre todo de distribución de alimentos, agua y medicamentos, que en gran medida le confió el Ministerio de Salud. Gracias a la importante capacidad de movilización de voluntariado —inicialmente alrededor de 2,200, pudo beneficiar a cerca de 62,000 personas afectadas, como parte de acciones que se pretende ampliar hasta llegar a cubrir la alimentación de 30,000 familias (150,000 entre niños, mujeres, hombres y personas ancianas damnificados) y la construcción de 23,500 viviendas temporales, entre muchas otras actividades, que habrán de desarrollarse en un plan de tres fases.¹⁸

Además de sus relaciones con la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) y con sus pares nacionales, la Cruz Roja Salvadoreña ha estrechado vínculos con otras organizaciones gubernamentales nacionales y del exterior, que igualmente se volcaron en ofrecer su ayuda. En respuesta a un llamado a la ayuda internacional, la IFRC pudo aportar cerca de 1.5 millones de dólares, a los que se sumaron donativos en especie, difíciles de cuantificar, de la Cruz Roja

¹⁸ Véase El Salvador: Earthquake Appeal No. 02/2001. International Federation of Red Cross (IFRC). Mediante este llamado internacional se intenta recabar 5.4 millones de francos suizos para la asistencia de 154,000 víctimas damnificadas durante 14 meses.

Canadiense, la Estadounidense, y una colaboración aún mayor, de 2.7 millones, de la Cruz Roja Española. Entre las contribuciones de las ONG destaca la de OXFAM, por 150 millones

Asimismo, el gobierno solicitó a la Iglesia Católica Salvadoreña que tomara un papel relevante en las labores de alivio para las familias más afectadas. Junto a ella muchas organizaciones católicas, entre ellas Catholic Relief Services, desde los Estados Unidos, prestaron su ayuda inmediata, gracias también a sus vínculos con importantes organizaciones correligionarias del exterior.

Otras organizaciones religiosas no católicas, como Action by Churches Together (ACT) y la Federación Mundial Luterana se concentraron en las familias pobres más desatendidas.¹⁹

Asimismo fue de destacar la labor de ONG internacionales que operan tradicionalmente en El Salvador, como la mencionada OXFAM, del Reino Unido, entre muchas otras, que trabajó coordinadamente con la Cruz Roja.

c) **La cooperación internacional**

Como se mencionó, la CONASOL se constituyó como entidad integrada con representantes del sector empresarial encargada de supervisar, al lado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la transparencia en la recepción y distribución de la cuantiosa ayuda internacional. Dos años atrás, en ocasión de la ayuda recibida por el Mitch, la Asociación Nacional de Empresas Privadas (ANEP) había asumido esta función.

Para la recepción de la cuantiosa ayuda que empezó a fluir, las Fuerzas Armadas centraron las operaciones, a partir del día siguiente, en el aeropuerto de Comalapa, en vez del de Ilopango, utilizando, como en otros países, el sistema informático SUMA (*supply management*) desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el control de origen y destino de la ayuda en especie. Al igual que lo ocurrido tras el Mitch, la reacción de las fuentes públicas —bilaterales y multilaterales— fue inmediata, así como también la de las privadas, organizaciones y particulares. Además, en el caso particular de este país, se contó con el apoyo de la cuantiosa población emigrante que vive en América del Norte que, en lo individual o por medio de sus organizaciones, hizo envíos extraordinarios de dinero a sus familiares, o bien donativos en especie, gracias a la movilización de los consulados salvadoreños en el exterior.

Dentro de la ayuda la proveniente de las agencias de las Naciones Unidas, destacó el aporte inicial del Programa Mundial de Alimentos (PMA), por 200,000 dólares, como parte de su paquete de emergencia, y la ayuda inmediata de la OPS para cubrir necesidades sanitarias básicas, cuyo presupuesto inicial fue de 770,000 dólares (mayoritariamente en especie), que pronto aumentó a 1.7 millones. A éste se sumó otro aporte inmediato del Fondo de las Naciones

¹⁹ Véase Chris Herlinger, Dateline ACT: El Salvador 01/01, Priority to assist people in rural areas, 22 de enero de 2001. Publicado por Reliefweb. El autor es oficial de prensa de ACT en El Salvador y oficial de información del Programa de Respuesta Mundial del Servicio Mundial de Iglesias (CWS), Nueva York. Consúltase la página web de ACT en Ginebra, Suiza, <http://www.act-intl.org>.

Unidas para la Infancia (UNICEF) por 500,000 dólares, integrado mayormente por distribución de agua potable y material y equipo médico y educativo. Estas acciones se complementaron con un aporte inicial de 50,000 dólares en efectivo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el envío de especialistas en desastres por parte de la Oficina para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA), de los Cascos Blancos (voluntarios de las Naciones Unidas) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la inmediata reorientación de acciones en algunos proyectos, entre muchas otras.

Sin embargo, para cubrir las necesidades de los seis primeros meses (febrero a julio de 2001) el 26 de enero el Sistema de las Naciones Unidas lanzó un llamado conjunto para recabar 34.9 millones de dólares. De ellos 12.7 millones los orientaría en PNUD a vivienda y rehabilitación de las condiciones de vida de las familias rurales, que fueron las más afectadas; 9.9 millones a ayuda alimentaria mediante el PMA; 6 millones a salud y saneamiento mediante la OPS y UNICEF, entre los renglones principales. Se estima en 200,000 el número de personas beneficiarias de los programas que se pongan en operación.

Sobre una base bilateral, los países realizaron sus respectivas contribuciones, muchas de ellas en especie (personal, equipo de salvamento, etc.), y por lo mismo difíciles de cuantificar. Destacaron en este ámbito España, cuyos aportes se acercaron a los 9.5 millones de dólares, los Estados Unidos (5.9 millones), Alemania (5 millones) e Italia (3.7 millones), además de diversas contribuciones del Reino Unido, México, Suiza, Japón, Venezuela y de los demás países centroamericanos. La ayuda española fue en su mayoría (7.7 millones) compuesta por donativos en efectivo, mientras que la de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), que opera cercanamente con ONG, se orientó principalmente (4.9 millones) al apoyo de proyectos de CARE y de la Fundación para la Vivienda CHF.

En total, la ayuda externa —bilateral y multilateral— que se había podido cuantificar hasta el 2 de febrero ascendía a 17.8 millones de dólares. Además, el sistema de las Naciones Unidas había hecho un llamamiento a la comunidad internacional para la provisión de ayuda para la rehabilitación, por un monto cercano a los 35 millones de dólares.